

vala.—José García Ramírez.—El Landa oficial mayor.

Es copia que certifico. México, Noviembre 6 de 1874.—Lic. Enrique Landa, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sonora por el C. Nieves E. Acosta, contra el cobro que le hace el C. Administrador de Rentas de Guaymas á título de derechos de 8 p \S de consumo, causados por la internacion al Estado de efectos extranjeros:

PEDIMENTO EL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El fiscal que suscribe ha visto y examinado las razones que espone el quejoso C. Nieves E. Acosta, sobre la cantidad de doscientos treinta y tres pesos noventa y cinco centavos, incluso el federal, que le ha exigido el C. Administrador de Rentas de esta Ciudad, por derecho de 8 p \S . de consumo sobre algunos efectos extranjeros nacionalizados que ha remitido al interior del Estado; estas las considera fundadas y apoyadas en la ley, en consecuencia debe ampararse y protegerse como lo solicita.

En el concepto del que suscribe, no hay duda que ese derecho de consumo es en realidad un recargo que se hace al derecho de importacion, lo que no pueden hacer los Estados sin consentimiento del Congreso de la Union como lo previene la frac 1^a del art. 112 de la Constitucion general. Tampoco puede alegarse en contra, de que estando derogado el art. 19 del arancel vigente, por la ley de 30 de Mayo de 1872, esten autorizados los Estados para decretar tales impuestos, sino lo que ha hecho esa ley, es quitar esa prohibicion dejando en aptitud á las Legislaturas de los Estados para imponer esos impuestos; pero siempre con el requisito in-

dispensable que previene el artículo constitucional de que se ha hecho referencia; y no habiéndose obtenido de este, indudablemente se le viola al quejoso la garantía que le otorga la Carta fundamental en su art 16, y tanto por esto, como estar fundado el ocursó en las fracciones 1^a y 3^a de la ley de 20 de Enero de 1869, es de accederse á lo que solicita, en lo que está de acuerdo el Promotor fiscal.

Guaymas, Julio 31 de 1874.—Lic. José Monteverde.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guaymas, Agosto 20 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito, por el C. Nieves E. Acosta, contra el cobro que el C. Administrador de Rentas de esta Ciudad le hace de doscientos treinta y tres pesos noventa y cinco centavos, por derechos de 8 p \S . de consumo por internacion al Estado de ciento veintiocho bultos de efectos extranjeros nacionalizados, á la consignacion del C. Francisco C. Aguilar, de Ures. Visto el certificado expedido por dicha Administracion, que á la letra dice:

“Certifico que: D. Francisco A. Aguilar ha pagado en esta oficina, por D. Nieves E. Acosta, doscientos treinta y tres pesos noventa y cinco centavos que importó el derecho de consumo y federal, por la expedicion de los pases núms. 520 al 523, despachados el 18 del corriente, y cuyo entero ha verificado, haciéndolo bajo protesta, para dejar su derecho á salvo, caso que le conviniera reclamar el cobro que se le hace. Y á pedimento del interesado, etc.”

De cuyo certificado se deduce que D. Francisco A. Aguilar, que fué quien hizo el enteró, lo hizo bajo protesta; lo cual se confirma por el informe de fecha 23 de Julio próximo pasado del ejecutor del acto reclamado, que dice al fin: *y cuyos derechos (refiriéndose á los causados por los ciento veinti-*

...tiocho bultos en cuestion) han sido pagados por D. Francisco A. Aguilar, bajo protesta. Visto el informe con justificacion, dado por el mismo, el 28 de dicho mes, en que dice: "por el valor de estos derechos firmó la casa de D. Francisco A. Aguilar, un pagaré á diez dias de su fecha, y al estenderse esa obligacion protestó sobre dicho pago" (se entiende, la casa de Aguilar.) Visto el parecer fiscal; el alegato del interesado; la citacion para sentencia y cuanto mas de autos consta y tener presente convino, y

Considerando: Que el pago de los derechos causados por D. Nieves E. Acosta, por la internacion al Estado de ciento veintiocho bultos de efectos nacionalizados, á la consignacion de D. Francisco A. Aguilar, de Ures, se hizo lisa y llanamente, pues aunque el encargado de hacer el pago, D. Francisco A. Aguilar, protestara al hacerlo, no es á él á quien correspondia, sino al interesado.

Que aun cuando se quisiera hacer comprender que la protesta era en nombre de éste, es nula, sin embargo, por no estar hecha por el Sr. Aguilar, con poder especial para ello del Sr. Acosta, dueño de los efectos, como lo exige la doctrina de Escriche, voz "Protesta."

Que no protestando legalmente dicho Sr. Acosta, como pudo haberlo hecho, y en cuyo caso se reservaba su derecho intacto para reclamar despues, si le convenia, sin que el pago verificado le hubiera perjudicado en lo mas mínimo; se tiene por no hecha la protesta y se considera que no fué su voluntad reclamar contra la disposicion de la Legislatura del Estado que manda cobrar derechos de consumo por los efectos nacionalizados á su internacion; y considerando, por último, que no verificándose en tiempo esta testificacion, despues el amparo es improcedente, en cuyo caso son bien cobrados los derechos causados por la internacion de los efectos del Sr. Acosta, al Estado; este Juzgado, por las consideraciones expuestas y apoyado en los arts. 101 y 102 de la Constitucion general, fallar:

1º: La Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Nieves E. Acosta, por el cobro que el C. Administrador de Rentas de este puerto, le hace de doscientos treinta y tres pesos noventa y cinco centavos por el 8 p $\frac{1}{2}$ de consumo, causado por la internacion al Estado, de ciento veintiocho bultos de efectos nacionalizados, por no violarse, con dicho cobro, en la persona del quejoso, la garantía que invoca y concede el art. 16 de la Constitucion general.

2º: Notifíquese; publíquese en el periódico oficial y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia, para su revision.

Fernando M. Astiazarán, Juez de Distrito de Sonora, definitivamente juzgando, lo decretó, firmándolo con los de su asistencia. —Fernando M. Astiazarán.—Asistencia, P. del Rincon.—Asistencia, P. A. Pina.

Es copia que certifico. Guaymas, Agosto 21 de 1874. —Fernando M. Astiazarán.—Asistencia, P. del Rincon.—Asistencia, P. A. Pina.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre 7 de 1874.—Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Sonora, por el C. Nieves E. Acosta, contra el acto del C. Administrador de rentas de Guaymas, que le ha exigido el pago de la cantidad de doscientos treinta y tres pesos noventa y cinco centavos, á título de derechos de 8 p $\frac{1}{2}$ de consumo, causados por la internacion al Estado, de ciento veintiocho bultos de efectos extranjeros; cuyo cobro, segun manifiesta el quejoso, es contrario á la prevencion que contiene la frac. 1ª del art. 112 de la Constitucion federal, y vulnera la garantía individual que consigna el art. 16 del mismo Código, y

Considerando: Que no existe disposicion legal que exija como requisito previo, para interponer el recurso de amparo, que se for-

anule una protesta con determinadas solemnidades y por el mismo agraviado, contra el acto que motivare la interposicion del recurso; razon por la cual carece de fundamento la resolucion del Juez de Distrito, que ha negado el amparo de la Justicia federal al C. Acosta, con motivo de no haber formulado por sí mismo, una protesta contra el cobro que ha dado origen á este juicio, ó por medio de otra persona con poder especial para ello.

Considerando: Que conforme á la frac. 1.^a del art. 112 de la Constitucion federal, los Estados no pueden sin consentimiento del Congreso de la Union, imponer contribuciones ó derechos sobre importaciones y exportaciones.

Considerando: Que no puede entenderse concedido á los Estados ese permiso por la ley de 31 de Mayo de 1872, que derogó los arts. 19 y 33 del Arancel vigente; pues la expresada ley tuvo por objeto exclusivo dejar subsistente el derecho de consumo en el Distrito federal y territorio de la Baja California.

Considerando: Que el derecho de 8 p. S. de consumo, cuyo pago ha exigido al C. Acosta, es en realidad un impuesto sobre importaciones de efectos extranjeros.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitucion de la República, se decreta:

1.^o: Se revoca la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Sonora, en 20 de Agosto del presente año, que declaró no haber lugar al amparo de la Justicia federal, en el presente caso.

2.^o: La Justicia de la Union ampara y protege al C. Nieves E. Acosta, contra el C. Administrador de Rentas de Guaymas, por el cobro que le hace de doscientos treinta y tres pesos noventa y cinco centavos, como derechos de 8 p. S. de consumo, causados por la internacion al Estado, de ciento veintiocho bultos de efectos extranjeros.

Deyuévanse las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de

esta sentencia para los fines consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*J. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José G. Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Noviembre 4 de 1874.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Puebla por Laureano Torres, José Regino y Andrés Molina, contra los procedimientos del C. Gefe político de Atlixco que los sentenció á la última pena.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal, en el juicio de amparo promovido por los reos Laureano Torres, José Regino y Andrés Molina, contra el C. Gefe político de Atlixco, por que los sentenció á sufrir la pena capital, supuesto su estado que el de alegar, ante usted dice: que los fundamentos de los quejosos para haber interpuesto el presente recurso, son únicamente los de haberse violado en su perjuicio la garantía que á todo reo concede la frac. 5.^a del art. 20 de la Constitucion general, pues que habiendo sido opuestas entre sí sus defensas, solo se les nombró por la autoridad responsable un defensor para los tres.

Antes de todo, C. Juez, es necesario advertir, que el delito ó delitos por que se les juzgó y sentenció, fueron los de asalto y homicidio perpetrado en la persona del C. Leo-